

PRÓLOGO

El golpe contra la “vía chilena” al socialismo y su impacto en la región

Por M. Lucía Abbattista y Ana M. Barletta

“Gracias por comprender el drama de mi patria, que es, como dijera Pablo Neruda, un Vietnam silencioso; no hay tropas de ocupación, ni poderosos aviones nublan los cielos limpios de mi tierra, pero estamos bloqueados económicamente, pero no tenemos créditos, pero no podemos comprar repuestos, pero no tenemos cómo comprar alimentos y nos faltan medicamentos, y para derrotar a los que así proceden, sólo cabe que los pueblos entiendan quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos”

(Discurso de Salvador Allende a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, México, diciembre de 1972)

Estas palabras de Salvador Allende, nueve meses antes del golpe de Estado que terminó con su gobierno, son un testimonio del dramatismo de la encrucijada en que éste se encontraba, pasados poco más de dos años desde aquel 4 de septiembre de 1970 cuando la ilusión de construir el socialismo por la vía institucional había comenzado.

Efectivamente, el triunfo electoral de la Unidad Popular en Chile, había despertado un altísimo interés en Chile y en el mundo entero. La coalición compuesta por los partidos Socialista y Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), y otros grupos más pequeños, triunfó con el 36,3% de los votos contra el 34,9% que obtuvo el Partido Nacional cuyo candidato era Jorge Alessandri y el 27,4 % de la Democracia Cristiana. Y, tras la necesaria convalidación de la mayoría en el Congreso, en noviembre de 1970 asumió la presidencia Salvador Allende.

A partir de entonces, la “vía chilena” al socialismo estuvo ubicada en el centro del debate político local e internacional. Fueron miles los exiliados de otros procesos y/o militantes de distintas pertenencias que llegaron a Chile para ser testigos y protagonistas de lo que allí se vivía y proyectaba. Aquella “vía chilena” apostaba originalmente al desarrollo de una “revolución pluralista, democrática y en libertad” que consideraba posible una transición al socialismo a partir de los marcos institucionales y legales republicanos liberales, basándose en una lectura de la solidez institucional durante la historia del siglo XX chileno y de la creencia en una tradición profesionalista de las Fuerzas Armadas que respaldaría esta experiencia.

El conjunto de sus postulados y las medidas que pusieron en práctica reinstalaron polémicas claves para la izquierda: ¿había necesidad de un partido único para conducir la transición al socialismo? ¿era precondition la ruptura con la legalidad del orden democrático liberal? ¿era posible alcanzar el socialismo sin enfrentamientos violentos ni alto costo en vidas humanas por la vía institucional? ¿y sin desorganizar la producción sino ampliando el sector público? ¿era viable crear poder popular pero no de manera antagónica ni independiente de la experiencia del gobierno, sino de forma articulada con ésta?

Para dar cuenta de esto nos parece fundamental destacar cuáles entendemos que fueron las medidas más radicales puestas en marcha por la Unidad Popular. Pensemos, desde el punto de vista económico, que Allende había heredado del gobierno de Eduardo Frei (1964-1970) un país con un altísimo índice de inflación y con una seria

alza de los precios. Sin contar con la larga sequía que se había producido en 1969 y que había tenido múltiples impactos en la producción agrícola y minera.

El escenario era delicado. Ante la confirmación del triunfo de la Unidad Popular se produjo, también, una fuerte fuga de capitales. Sin embargo, el gobierno no dudó en poner en marcha su programa. Casi de inmediato se implementó una profundización de la reforma agraria emprendida por el gobierno demócrata cristiano de Frei. Cuando asumió Allende, informó que Chile tenía 6.000.000 de hectáreas arables de las cuales se estaban utilizando sólo 2.600.000. En los primeros meses, la Unidad Popular eliminó el latifundio al nacionalizar 4.395 propiedades, que sumaban 6.305.000 hectáreas y que se repartieron entre 53.576 familias campesinas. El gobierno creó por decreto el Consejo Nacional Campesino, así como un Consejo Provincial en cada provincia, para oficializar la participación del campesinado y de sus organizaciones más reconocidas en la dirección de las políticas agrarias.

Se creó un Área Social del Estado para fortalecer al sector público y un Área Mixta. Desde las primeras semanas se apostó a la estatización de empresas e industrias y, en algunos de los casos, se propició la cogestión obrera. Según algunas estadísticas, en Chile existían en 1971 cerca de 35.000 empresas. Sólo en una primera etapa, el gobierno se propuso nacionalizar alrededor de 150 empresas o industrias de carácter estratégico, como las grandes industrias del acero, el carbón, el salitre y el cemento, las telecomunicaciones, así como algunas industrias textiles y de otras ramas.

El otro gran ícono de las medidas de la Unidad Popular fue la nacionalización del cobre en julio de 1971, que implicó la expulsión de Chile de las empresas de capital norteamericano como la Anaconda y la Kennecott. La ley contemplaba indemnizaciones justas a las empresas a través de la Contraloría General de la República. Lamentablemente, las revanchas internacionales llevaron a una baja de casi un 25% del precio internacional del cobre durante 1971. En ese mismo año, se dio un fuerte paso con la nacionalización de la gran banca privada y se propiciaron cambios en la política financiera para abaratar, democratizar y descentralizar el crédito. Las represalias nacionales e internacionales no se hicieron esperar. En diciembre de 1971, el gobierno se vio obligado a suspender la convertibilidad de la moneda y toda operación con valores extranjeros. Así como hubo al menos tres grandes devaluaciones entre 1971 y 1972, contrarias a lo proyectado.

Por las grandes dificultades que implicaban las represalias norteamericanas y el cada vez más pronunciado desabastecimiento de productos fundamentales no solo para consumo cotidiano sino, especialmente, para la industria, la Unidad Popular desplegó intensas campañas para “ganar la batalla de la producción”, para aumentar la productividad en múltiples áreas, intentando compensar las pérdidas. El mensaje era claro: era necesario trabajar duro, como lo había dicho Allende el mismo día del triunfo electoral: *“piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria”*.

Otra de las dimensiones más importantes de la política estatal para controlar la inflación fue, primero, el control de precios de artículos de uso popular y de uso suntuario desde el Estado y, luego, la organización de los vecinos en Comités y luego Juntas de Abastecimiento y control de Precios (JAP) para combatir el acaparamiento, el

mercado negro, y garantizar la distribución de productos. En consonancia con los postulados de *las 40 medidas de gobierno*, todos los niños recibieron gratuitamente medio litro de leche diario en las escuelas. Esa iniciativa, que había sido promesa electoral, se puso en práctica dos meses después de asumida la presidencia. Se aumentaron las pensiones, las asignaciones familiares de obreros, campesinos y empleados públicos y los fondos para jubilados. A pesar de que el ritmo de aumentos no alcanzaba a suplir los costos cada vez más altos de la vida cotidiana, este tipo de aumentos del gasto público fue duramente repudiado por la oposición.

En este sentido, también fueron muy significativas las políticas comunicacionales de explicación del problema del acaparamiento y del desabastecimiento de productos, que involucraron a intelectuales y artistas afines al gobierno. La disputa en torno a la propiedad de los medios de comunicación y las estrategias comunicacionales alternativas fueron claves durante todo el gobierno de Allende.

La Presidencia creó, además, una Secretaría General de la Juventud con el fin de aumentar la presencia política de las nuevas generaciones, muy destacada en los partidos que conformaban la Unidad Popular, y su capacidad de acción. Desde allí se coordinó la participación masiva de jóvenes en grandes campañas de trabajos voluntarios, alfabetización, forestación, construcción de casas, difusión y propaganda. Todos estos también fueron cargos ad honorem.

En lo que hace a las políticas de salud, la gran apuesta fue mejorar la atención sanitaria pública y democratizar el Servicio Nacional de Salud. Se realizaron importantes campañas contra las enfermedades endémicas, especialmente en las provincias afectadas por el terremoto sufrido en julio de 1971.

Respecto a las políticas educativas hubo diversas iniciativas. La construcción de nuevas instituciones escolares, el incremento de becas de estudio, el reparto de millones de libros de textos, fueron algunas de ellas. Por otra parte, la propuesta de reforma educativa, que recibió el nombre de Escuela Nacional Unificada fue muy resistida, inclusive con la realización de fuertes movilizaciones opositoras de estudiantes secundarios de escuelas privadas. En 1971, se crea la Editorial del Estado – Quimantú, tras la estatización de una editorial llamada Zigzag, cuyos libros se vendían a muy bajo precio en librerías y quioscos para hacer efectivamente accesible “la cultura” al pueblo.

Y por último, pero no menos importante, es necesario rescatar la importante política de vivienda. Según los propios discursos de Allende, cuando la UP asumió el gobierno faltaban en Chile 480.000 viviendas. Después del terremoto, la cifra ascendió a 520.000. Durante 1971 y 1972 más de 100.000 fueron entregadas y otras decenas de miles comenzaron a construirse.

Por todo esto, y a pesar de la amplísima diversidad de caracterizaciones que recibieron la Unidad Popular, su programa y sus medidas concretas, era hegemónica la interpretación de que en la suerte que corriera la experiencia chilena estaba en juego no sólo la suerte de los trabajadores, de su pueblo, sino la del conjunto de las organizaciones revolucionarias latinoamericanas. La victoria de la Unidad Popular y la puesta en marcha de su programa implicaba un sacudón, sino un vuelco, en la correlación de fuerzas regional. Y, además, abría un nuevo horizonte de expectativas,

tanto para quienes apostaban por el socialismo, como para los llamados “países no alineados”.

De hecho, para mencionar algunos pocos datos de la política exterior, Chile se integró al movimiento de Países No Alineados; restableció relaciones diplomáticas con Cuba, que implicaron visitas mutuas de sus mandatarios y el desarrollo de acuerdos de cooperación y comercio; estableció relaciones diplomáticas con China, con la República Democrática Alemana, con Vietnam del Norte y con Corea del Norte; firmó acuerdos comerciales y de intercambio educativo con México; se alineó con Perú en los foros internacionales y apostó al fortalecimiento del Pacto Andino; creó la figura de los “embajadores culturales”, como Víctor Jara quien, junto a Allende, recorrió el continente generando encuentros y cultivando apoyos para el proceso chileno, tratando de superar el bloqueo informativo; y, en lo que hace a nuestra Argentina, el acercamiento más claro se produjo con el gobierno de Héctor Cámpora, materializado en la asistencia de Allende a la asunción presidencial el 25 de mayo de 1973 y en la firma de acuerdos comerciales en los meses siguientes.

Las fricciones dentro de **la** propia coalición gobernante fueron muchas. Pero lo que Patricio Guzman denominó en su serie *La Batalla de Chile* como “la insurrección de la burguesía” contra la experiencia de la Unidad Popular, adquirió en Chile tonos nunca antes observados en la región, produciendo un clima de altísima polarización social. Marchas de las cacerolas; prolongados lock outs patronales; desabastecimiento y estímulo del mercado negro; desestabilización del Poder Ejecutivo desde el Congreso; grandes movilizaciones callejeras opositoras; olas de atentados de grupos terroristas de extrema derecha como “Patria y Libertad”; cortes de luz; paro de camioneros y de sectores profesionales como médicos y farmacéuticos; diarios allanamientos en las poblaciones en busca de armas; estrategias de desinformación en los medios; conspiración permanente en Carabineros y en las Fuerzas Armadas.... Un intento fallido de golpe de Estado el 29 junio de 1973 (el Tanquetazo) y, por último, el definitivo, el 11... Durante el bombardeo al Palacio de La Moneda, Salvador Allende, antes de terminar él mismo con su vida después de combatir “con casco y metralleta”, habló para la Historia:

Trabajadores de mi patria: Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición, pretende imponerse. Sigán ustedes, sabiendo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Éstas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición” (Último Discurso de Salvador Allende, desde La Moneda, transmitido por Radio Magallanes)

Unos días después, llegaba la caracterización de quien parecía haber acertado con el camino elegido:

“Este golpe fascista no es sólo expresión armada de militares traidores al servicio de la oligarquía nacional y de los intereses imperialistas en Chile, sino que responde también a la estrategia en el continente del gobierno imperialista de los Estados Unidos, encaminada, en este caso, a liquidar un bastión más del movimiento libertador de América Latina, y aislar y rodear con gobiernos subimperialistas como el de Brasil, o

dictaduras títeres como las de Bolivia, Uruguay y Paraguay, al Perú, encabezado por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y a la Argentina, regida por un gobierno popular y escenario hoy de un amplio movimiento de masas francamente antiimperialistas.” Palabras de Fidel Castro el 23 de septiembre de 1973.

El golpe del 11 de septiembre fue un acontecimiento de trascendencia latinoamericana: marcó un hito más que significativo en tanto momento fundamental de clausura de una de las vías de transformación radical de la sociedad, pensada como contraimagen de la revolución cubana de 1959. El gobierno revolucionario cubano se había instalado por la vía de la lucha armada revolucionaria, creando de este modo las condiciones para construir el socialismo y mantenerse en el poder. La Unidad Popular, en 1970, significó la primera vez que en Latinoamérica un gobierno anudado por una coalición de izquierdas lograba hacerse con el poder del Estado por la vía institucional y no instalaba un gobierno socialista sino que se ubicaba en la vía para lograrlo. La discusión sobre el modelo cubano y el modelo chileno alimentaba una de las más típicas controversias del momento, la que planteaba dilemáticamente: “¿Reforma o Revolución?”, dos caminos para obtener lo mismo, como firmaba el Che en la dedicatoria que ofrece en su segundo tomo de Guerra de Guerrillas: “A Salvador Allende, quien por otros medios trata de obtener lo mismo”.

Pero a la vez, en los primeros años de la década del '70 se fue cargando el escenario latinoamericano de una nueva ola de gobiernos dictatoriales alineados explícitamente con Estados Unidos. Este fenómeno tuvo lugar en un primer momento en América del Sur, donde se pusieron en práctica, coordinadamente, las enseñanzas contrainsurgentes como respuesta o prevención frente al crecimiento de movimientos revolucionarios, con la experimentación, en alguno de los casos, de nuevos modelos económicos neoliberales: golpes como el del Gral. Hugo Bánzer en Bolivia contra Juan José Torres (21 de agosto de 1971), el del Gral. Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador contra Velasco Ibarra (15 de febrero de 1972) y la tutela militar sobre Juan María Bordaberry con disolución del Parlamento y las garantías constitucionales en Uruguay (27 de junio de 1973), son algunos de los casos. De la misma manera que se apuntalaron y reforzaron las ya longevas dictaduras de la región, como las de la familia de Anastasio Somoza en Nicaragua, desde 1936; de Alfredo Stroessner en Paraguay, desde 1954; de François Duvalier y su hijo Jean-Claude en Haití, gobernando de facto desde 1964; de Emilio Garrastazu Médici en Brasil (sucesor de Humberto Castelo Branco y de Artur da Costa e Silva, generales a cargo desde el golpe de Estado contra Joao Goulart, en 1964). En el caso argentino, la tríada Onganía-Levingston-Lanusse que gobernó entre 1966 y 1973, después de derrocar al gobierno radical de Arturo Illia, no es ajena a este escenario, aunque aquí siempre sea inevitable destacar las particularidades que imprimía a la política el clivaje peronismo-antiperonismo ya que Perón también había sido derrocado tempranamente, en 1955 (y había tenido también su junio y su septiembre), contemporáneamente con el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, donde algunos sostienen que todo empezó.

Efectivamente, esta alternancia entre reforma y reacción no era nueva en Latinoamérica. Y también la reacción tenía sus modelos: el brasileño de 1964 (persecución masiva sobre toda la izquierda marxista); el modelo de Onganía de 1966 (suspensión de la política instaurando un largo período militar con búsqueda de apoyo popular entre los civiles, próximo al modelo peruano); el modelo de Lanusse, con el Gran Acuerdo Nacional de 1971 (devolución del poder a los civiles con tutela militar, no declarar enemigo al peronismo, acordar con Perón y considerar enemigos a los

sectores denominados “subversivos” de adentro y de afuera del peronismo). Y Pinochet, ¿iba a devolver el poder a corto plazo? ¿Cuál de estos modelos tomaría? Parecía que una simple sublevación de cuartel ya no bastaba.

Como ha sido afirmado, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es necesario entenderlo como parte de una “restauración conservadora” en Sudamérica y, como un freno brutal a una de las experiencias sociales y políticas que más expectativas despertaba a nivel internacional para aquellos constructores de horizontes emancipatorios. Y por esto no puede ser pensado simplemente como “un golpe más”.

Se experimentó entonces, y es leído hoy, como un golpe definitorio en varios planos. En cuanto a las expectativas y repertorios de lucha disponibles para la transformación social de ahí en adelante, la interrupción de la vía chilena devino en la confirmación, para muchas organizaciones de la izquierda latinoamericana, de que la lucha armada era el único camino posible para la toma del poder, en desmedro del camino electoral. Por otro lado, porque el golpe sacudió a la opinión pública internacional al instalar una maquinaria bestial de exterminio, con la abierta persecución, detención o secuestro y tortura, así como, en muchos casos, fusilamiento y desaparición forzada de los referentes y simpatizantes del gobierno derrocado y de otras organizaciones populares de base y políticas, inauguraron un ciclo represivo en el Cono Sur de una magnitud y coordinación sin precedentes.

La Junta, que se denominó a sí misma *Junta Militar Gubernamental de Liberación Nacional*, tomó la decisión de expulsar del país y entregar a las dictaduras vecinas a muchos exiliados latinoamericanos que vivían en Chile al momento del golpe. Exiliados bolivianos que habían tenido que huir de Bolivia en 1971; exiliados brasileños con residencia en Chile; exiliados uruguayos que concurrieron a Chile a partir del recrudecimiento de la persecución política en 1972; exiliados argentinos que aún no sentían confianza suficiente en el proceso político democrático abierto en mayo de 1973. Este tipo de campañas de persecución permite, en su reverso, tomar dimensión de las redes que efectivamente unían las experiencias políticas y sociales en nuestro continente, de cómo las enseñanzas -procesadas bien o no- elaboradas en un país tenían luego repercusiones en otros por la permanente circulación (voluntaria o involuntaria) de militantes políticos. También permite visualizar la saña con la que se buscó poner fin a ello recurriendo a lo más conservador del nacionalismo decimonónico, la religión y las armas en cada uno de los países. Sin dudas, el “establishment” de Estados Unidos demostró cuán efectivo resultó para coordinar militares y/o tecnócratas latinoamericanos, involucrados económica, ideológica y políticamente con el sostén del sistema capitalista, para apuntalar o recuperar el “status quo” en momentos de riesgo, garantizando la coordinación eficaz de la represión y la desarticulación regional en materia económica y social.

De todas maneras, la coyuntura adversa impulsó también la profundización de los acuerdos (aunque resultara efímera su existencia) entre diferentes organizaciones político-militares del cono sur, que habían tenido como punto de encuentro el Chile de la Unidad Popular. Eso también fue un fenómeno nuevo. La avanzada fascista, que leían como confirmación de sus certezas sobre la vía armada como única efectiva para la toma del poder, fue un estímulo para que, en noviembre de 1974, se oficializara la creación de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR). La misma estuvo integrada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, el Partido

Revolucionario de los Trabajadores con su Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) argentino, los Tupamaros uruguayos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano. Funcionó durante al menos dos años como órgano de coordinación de las iniciativas de estas organizaciones en la zona, con base principalmente en la Argentina, único territorio del cono sur que se mantenía con un gobierno constitucional aunque de frágil legitimidad.

En la Argentina, el repudio al golpe en Chile fue unánime, aún más allá de las puras vanguardias revolucionarias, entre todo el espectro de las fuerzas políticas democráticas. Con matices y diferencias, éstas expresaron cierta conciencia del lugar que ocupaba la Argentina en esta encrucijada latinoamericana donde parecía estar jugándose la suerte de los proyectos transformadores. Este golpe -como “último eslabón del cerco sobre la Argentina, donde se dará la última batalla por la libertad de América” (como se escuchará en Bs, As, el 18 de septiembre en el Funeral Cívico de Homenaje a Salvador Allende, en el día de la independencia de Chile)- marcaba un poderoso cambio de rumbo, un profundo giro a la derecha que unos meses después, se estaría confirmando también en Argentina de la mano de un gobierno popular y democrático. Gobierno que, aunque ya desde 1974 no dejó de hacer concesiones a las pretensiones restauradoras de los sectores de poder, igualmente desembocará en un golpe de Estado sanginario, casi tres años después, el 24 de marzo de 1976.

Por todo esto y mucho más es que saludamos la presentación de esta nueva Colección de documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (D.I.P.B.A.) realizada por la Comisión Provincial por la Memoria y destacamos que ha sido producto de un proyecto que comenzó en el año 2010 con la investigación que estudiantes del College of William and Mary realizaron junto al equipo de trabajo del Archivo.

Algunos legajos del Archivo permiten reconstruir los altísimos niveles de tensión experimentados en Chile entre 1970-1973; otros, iluminan la situación de los miles de militantes chilenos y de otras nacionalidades que se encontraban en Chile al momento del Golpe y recurrieron a la Embajada Argentina en Santiago para preservar sus vidas (nos referimos a más de setecientas personas, entre septiembre y octubre de 1973); otros nos exponen las voces de la prensa argentina respecto de los diferentes fenómenos aquí narrados; y, por último, una gran cantidad de material da cuenta de la solidaridad volcada en actos, volantes, afiches, documentos, por múltiples organizaciones en la Provincia de Buenos Aires en repudio al golpe de Estado y en solidaridad con el pueblo chileno tanto durante el intenso año '73 (no olvidemos que el golpe se produce 12 días antes de las elecciones que finalmente consagraron a Juan Domingo Perón como presidente), como en el más complejo y doloroso '74 argentino.

La dinámica política en Argentina llevó a que la mayoría de los chilenos y contingentes de otras nacionalidades que escaparon de Chile para salvar sus vidas, con nuestro país como destino, partieran en los meses siguientes en busca de lugares más seguros, alejados de las bandas parapoliciales como la Triple A que comenzaron a operar a fines de 1973.

No por hacer historia contra fáctica, sino por recuperar la dinámica en la que se enmarcan estos acontecimientos, es necesario resaltar que los informes policiales de la DIPPBA que aquí se ofrecen fueron producidos mientras en Chile aún existían barricadas, ocupaciones y núcleos de resistencia obrera sin doblegar, pese a los operativos de detenciones y fusilamientos de la Junta Militar que derrocó a Allende; mientras existía alguna expectativa en la capacidad de respuesta popular contra la avanzada fascista por medio de la lucha armada; mientras se encontraban bloqueados con el exterior la mayoría de los canales de comunicación e información de Chile por orden de la Junta; mientras se aguardaba una contundente condena internacional al golpe que pudiera reponer a la Unidad Popular en el gobierno; mientras se intentaba procesar el impacto producido por la muerte de Salvador Allende en el bombardeado Palacio de La Moneda.

“La muerte de SA deja al descubierto cuán poderosos son los enemigos contra los que hay que luchar; la ceguera y el egoísmo de las clases privilegiadas y los sórdidos intereses del sistema; la traición de políticos que se dicen demócratas y cristianos... El camino al socialismo no era fácil porque los grandes intereses -y también los pequeños que los secundan- no lo toleran ni por la violencia ni por la legalidad...” **Jerónimo Podestá, *La Opinión*, septiembre de 1973.**